

**COLOMBIA, UN RUMBO INCIERTO:
DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUERRA A LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ¹**

Miguel Ángel Herrera Zgaib²
Universidad Nacional de Colombia

Resumen

En este escrito se trata de realizar unas aproximaciones históricas de la vida y luchas universitarias en una coyuntura estratégica de especial relevancia para los rumbos presentes de la paz en Colombia. Esta problemática educativa en su compleja relación con la política, la economía y la cultura es el teatro y antecedente que motiva y conecta una secuela de luchas reivindicativas que desembocan en una intensa serie de movilizaciones, a lo largo de los tres últimos meses del año 2018. Este ciclo de plantones, movilizaciones concurrencias y bloqueos de instalaciones universitarias marca el paso de la Universidad de la guerra a la reconstrucción de la universidad de la paz, interrumpida, aplazada por más de medio siglo. En suma, el advenimiento de la Universidad de la Paz sólo es posible con una efectiva transformación del sentido común dominante, que consagró hasta hace poco a la guerra como instrumento adecuado para recuperar la convivencia y el disfrute de la vida de la comunidad nacional colombiana.

Palabras-Clave: Educación popular. Movilizaciones. Capitalismo. Colombia.

COLÔMBIA, UM CURSO INCERTO: DA UNIVERSIDADE DA GUERRA À UNIVERSIDADE PARA A PAZ**Resumo**

Neste artigo, trata-se de aproximações históricas da vida e das lutas universitárias em uma situação estratégica de especial relevância para as atuais direções de paz na Colômbia. Essa problemática educacional, em sua complexa relação com a política, a economia e a cultura, é o teatro e o antecedente que motiva e conecta uma sequência de lutas e reivindicações que levam a uma intensa série de mobilizações nos últimos três meses de 2018. Esse ciclo de protestos, mobilizações lotadas e bloqueios de instalações universitárias marca a passagem da universidade da guerra para a reconstrução da universidade da paz, interrompida, adiada por mais de meio século. Em suma, o advento da Universidad de la Paz só é possível com uma transformação efetiva do senso comum dominante, que até recentemente considerava a guerra como um instrumento adequado para restaurar a convivência e o prazer da vida da comunidade nacional colombiana.

Palabras-Chave: Educação popular. Mobilizações. Capitalismo. Colômbia.

¹ Artigo recebido em 05/10/2020. Avaliação em 20/10/2020. Aprovado em 08/11/2020. Publicado em 22/12/2020.

² Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, Director del Grupo Presidencialismo y participación, Colciencias/Unijus. E-mail: maherreraz@hotmail.com / ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5755-1490>

Antecedentes inmediatos

“No sólo en la concepción de la ciencia política sino en toda la concepción de la vida cultural y espiritual ha tenido una enorme importancia la posición dada por Hegel a los intelectuales...”

Con Hegel se comienza a pensar no ya desde el punto de vista de las castas de los “estados”, sino según el “Estado”, cuya “aristocracia” son los intelectuales. La concepción “patrimonial” del Estado (que es el modo de pensar por castas) es la concepción que Hegel tuvo que destruir de modo inmediato...”

(Antonio Gramsci, Los intelectuales y el Estado hegeliano).

En este escrito se trata de realizar unas aproximaciones históricas de la vida y luchas universitarias en una coyuntura estratégica de especial relevancia para los rumbos presentes de la paz en Colombia, porque la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional tuvo y tiene injerencia, una parte de su intelectualidad, en la suerte que corre esa transición de un tiempo de guerra interna.

Es, sin embargo, un conflicto intestino que cobró vidas, sueños y cosechó triunfos circunstanciales; y repercusiones relevantes en la vida y organización de la cultura nacional que pasa de una fórmula patrimonial y carismática a otra legal y racional, al precipitarse el desenlace de una histórica crisis de hegemonía, que estuvo “borrada” un medio siglo de guerra social y resistencia a ésta por parte de la insurgencia subalterna. La que ahora ensaya sus primeros e inciertos pasos en el ámbito de la nueva sociedad civil, cuando se desarticula el bloque histórico de la dominación cuya remota genealogía se extiende a la independencia de España en 1819.

La marcha de la universidad pública y el SUE, el sistema universitario estatal con posterioridad al medio siglo pasado, ateridos, olvidados y sitiados por la casta oligárquica dirigente en función de dominio; sin embargo, siguió, contra todos los obstáculos, hacia el establecimiento de una nueva ciudadanía dispuesta a romper con las desigualdades abismales, la exclusión, la marginación de las minorías étnicas, y la estigmatización de las diferencias sexuales y culturales. Sobre todo, a partir de la derogatoria de la centenaria constitución de 1886, pieza maestra del Estado patrimonial, de casta, que postergó la emergencia de la modernidad, una vez que se frustró el sueño bolivariano de hacer como en la Francia de Napoleón.

En pocas palabras, después del grito de Córdoba, por la autonomía de la intelectualidad pequeño burguesa, de trazos jacobinos, heredera de la Ilustración, en confrontación con los efluvios tardíos de la Contra-reforma, y la prédica antimodernista de los papas para el “patio trasero” del Vaticano, esto es, Colombia y buena parte de Hispanoamérica, se trata de contribuir al establecimiento de la otra universidad en Colombia. Esta lucha erige las primeras piedras en el espacio de concertación de la Segunda República Liberal, donde confluye la intelectualidad socialista reformista, publicistas comunistas y anarquistas, atraídos por la Convención de Ibagué, luego de la derrota de la hegemonía conservadora. Una derrota que tuvo sus momentos: primero, por las luchas de resistencia, obreras, indígenas, campesinas y estudiantiles; segundo en la lucha por la nueva cultura y la nueva escuela, con la generación de Los Nuevos; y luego con la quiebra de la hegemonía económica, derivada del derrumbe capitalista de 1929.

Desde estas transformaciones superestructurales se empezó a ambientar la universidad para la paz, que tuvo en el retorno reaccionario del conservatismo, ante la división liberal de 1946, un primer empuje, con la vocería de un líder liberal popular, Jorge E. Gaitán, a pocos días de su asesinato. Entonces pronunció una Oración por la paz, en febrero de 1948, que fue premonitorio y predictivo.

Tenía a sus oídos la rectoría de Gerardo Molina, al frente de la Universidad Nacional de Colombia, un liberal que había hecho tránsito ideológico al socialismo en compañía de Antonio García Nossa, Jorge Zalamea, Carlos H. Pareja y otros intelectuales. Quienes a raíz del magnicidio de Gaitán, luego de llamar al levantamiento popular, al tomarse la Radio nacional, tuvieron que irse al exilio para salvar sus vidas de la reacción política, y la excepcionalidad impuesta.

El curso de la nueva universidad experimentó así un hiato violento, hasta que la tregua bipartidista, liberal y conservadora, le dio paso al Frente Nacional, y a la prolongación de la república de las armas bajo el régimen del estado de sitio. Así las cosas se entronizó en la cotidianidad de la universidad pública la impronta de la guerra y la excepción, así como el quiebre del proyecto de escuela única, que en parte se acarició durante la segunda república liberal, 1930-1946.

Porque se abrió el espacio al crecimiento de la universidad privada, por dos vías, el modelo religioso redivivo, y el laico desarrollista con la creación de la

Universidad de los Andes con el apoyo de Mario Laserna, Alberto Lleras Camargo y Germán Arciniegas, de vuelta ya de sus aires reformadores de 1918.

Es apenas, a raíz de las luchas democrático revolucionarias de campesinos, estudiantes, maestros, sindicalismo independiente y sacerdotes rebeldes de los años 60, que la universidad democrática, popular recupera su rumbo, en medio de la represión y la financiación extranjera de una propuesta tecnocrática que hacía parte del paquete de la Alianza para el Progreso. Así las cosas, será 1971, luego de una masacre universitaria, que se desencadenará un paro nacional que conquistará una segunda experiencia de cogobierno, después de la de 1934, que producirá el cierre de la Universidad Nacional durante un año, con el colofón de rectores policial, y orden marcial dentro del campus de la ciudad universitaria.

Los reclamos por la paz y la democracia en el país, en el marco de la universidad de la guerra, con la existencia de un estado de sitio interno, en correspondencia con un régimen de dictadura civil se mantendrá en la resistencia, con un fuerte activismo de las organizaciones de insurgencia basadas en el campo, y las primeras experiencias de guerrilla urbana, que tienen en el M19, el argumento de reclamar un nuevo orden político con el pueblo y las armas para conquistar el poder.

Hasta que se produjo con el gobierno conservador “progresista” de Belisario Betancur, 1982-1986, un amago de paz, con las organizaciones de la insurgencia subalterna, y en medio del recrudecimiento perverso de las economías ilegales, con basamento en la crisis agraria, y en las irregularidades en el comportamiento de los precios del café, sujetos al vaivén de los especuladores internacionales; más el despojo ininterrumpido de tierras a los campesinos pobres, colonos, y a las minorías étnicas en la frontera agrícola.

El fracaso de la paz vino acompañado del cierre de la Universidad Nacional, que se había convertido en “una república independiente”, en la que convivían delincuencia común, resistencia política, y contracultura, muy cerca del centro de la capital del país. Luego de unas protestas contra el gobierno, el rector Sánchez Torres, solicitó la intervención de la fuerza pública, que lo hizo en mayo de 1984, y desalojó la ciudad universitaria, clausuró las residencias y los servicios de bienestar que se ofrecían. Se avanzó en un proyecto de reestructuración durante el cierre que se extendió hasta el año 1985.

De ese modo se establece un ínterim en el largo periodo de la Universidad de la Guerra, una “pacificación” de la educación pública superior, cuyo laboratorio es la Universidad Nacional, y su timonel, Marco Palacios con todo el apoyo del presidente Belisario Betancur. Palacios era un exmilitante del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, de su dirección juvenil, que se radicalizará en la llamada “línea dura”, dándole nacimiento con otros agrupamientos, al Eln, que se estrena con su mensaje revolucionario nacionalista, cristiano y marxista, en el asalto de Simacota.

Hubo el abandono de Alfonso López Michelsen, máximo dirigente del MRL, que coqueteaba con la revolución cubana, hasta que ésta se declaró socialista y en abierta confrontación con el imperialismo estadounidense. Entonces le recordó a los universitarios, jóvenes, y clase media que lo seguía en su aspiración presidencial, que era un burgués y ellos pasajeros a la sumo de la revolución liberal de su padre en la década de los 30. Esta es la sepultura de la universidad del Frente Nacional.

La nueva reforma retoma los postulados de la reforma Patiño, en parte, con la que la universidad desarrollista buscó aclimatarse. Se le juntan elementos de gerencia y reforma curricular, con el debut de un exanarquista, el matemático Antanas Mockus, e intelectuales de la izquierda radical que hizo las pases con el establecimiento.

Habrá que esperar a un nuevo activismo estudiantil, como fruto de la contrareforma educativa anunciada por el presidente Juan Manuel Santos, quien luego del fracaso de las negociaciones del Caguán con la guerrilla de las Farc-ep, de la consolidación del plan Patriota y la liquidación de aquella, anunció al posesionarse en la plaza de Bolívar, junto a su mentor, Álvaro Uribe, que las llaves de la paz no estaban perdidas.

El flamante presidente, quien se había probado como ministro defensa, impulsor de la política pública de guerra, quería reformar la Ley general de Educación, y la que regía a la Universidad Nacional en particular desde 1992. En respuesta, el estudiantado de la Nacional organizó la protesta, recordó y actualizó el programa mínimo de los estudiantes colombianos, defendido en el año 1971. Creó una estructura orgánica y de mando, sensible a la pluralidad, la MANE, que hizo a un lado las fórmulas gremiales tradicionales con relativo éxito, porque logró parar la contrareforma, con el concurso activo de numerosas universidades públicas, de modo principal.

Pero, en la fase propositiva, la MANE se hundió en el manejo de las relaciones políticas con la insurgencia subalterna; con los sectores gremiales tradicionales, y en el dirigismo burocrático del estudiantado. La desmovilización sobrevino a la separación de la naciente multitud ciudadana universitaria que requería soluciones a corto plazo. Estas se pusieron en un proyecto de ley, y se derrumbaron en el tránsito de la reforma elaborada por las organizaciones universitarias en el Congreso, porque no tenía una bancada suficiente que la representara y una estrategia societal que presionara a los congresistas indecisos para que no la engavetaran.

Con la vuelta de la negociación de paz, que venía ocurriendo en conversaciones secretas durante los años 2006/08; en interlocución con una dirigencia de origen universitario, con Alfonso Cano, un estudiante de Antropología en los años 70, el comandante principal al frente del secretariado de las Farc-Ep, quien muere el 4 de noviembre de 2011, sigue presente la universidad. Así, entre los años 2011 a 2016, se estructuran los primeros pasos del acuerdo de Paz, que continuarán en el Encuentro exploratorio de los días 23 de febrero y 26 de agosto de 2012, hasta la negociación de La Habana, que cierra la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Antes, esta paz tuvo que vivir el fracaso del Plebiscito que debía aprobarla en octubre de 2016. Al votarse negativamente tuvo que someterse a la aprobación vía Congreso, que consiguió sumada a la aprobación de la Corte Constitucional. Para lo cual hubo en simultánea, de nuevo, una gran agitación y movilización universitaria en Bogotá, y en otras ciudades principales.

Se realizó la firma del Acuerdo, el 24 de noviembre de 2016, entre el presidente Santos y Timoleón Jiménez, el comandante del estado mayor central de las Farc-ep, en el Teatro Colón. Era el mismo lugar, donde en 1948, se había hecho la instalación del acto que fundó la OEA, y puso fin a la Unión Panamericana. Aquella vez sin la presencia del principal líder político liberal, Jorge E. Gaitán, excluido de la delegación oficial; y con la presencia agitacional, disruptiva de los jóvenes universitarios de América Latina, entre ellos, Fidel Castro, asistentes en Bogotá a unas jornadas universitarias antiimperialistas. Y el nuevo acuerdo de paz con la ausencia de su interlocutor principal, el exuniversitario Guillermo León Sáenz,

Alfonso Cano, a quien dio muerte el ejército en estado de indefensión, como lo denunció Monseñor Monsalve, en la diócesis de Cali.

A partir de 2016, la Universidad Pública recupera la lucha emprendida por la MANE, ya desaparecida, a través de la movilización en defensa de los Acuerdos de Paz, en los que no tuvo una presencia oficial y gremial. El movimiento reordena la agenda, se presenta con tres estructuras gremiales, Acrees, Unees y Fenares. Pero la lucha se reanima antes, en la Universidad Nacional, contra la reglamentación estudiantil, que intentó reformarse en forma regresiva. Esta lucha la gana el movimiento estudiantil.

Esta problemática educativa en su compleja relación con la política, la economía y la cultura es el teatro y antecedente que motiva y conecta una secuela de luchas reivindicativas que desembocan en una intensa serie de movilizaciones, a lo largo de los tres últimos meses del año 2018. En todo ello tuvo un papel protagónico la dirección estudiantil nacional en desarrollo y desenlace relativamente exitoso en materia de defensa presupuestal y auxilio inmediato para el sistema universitario estatal, SUE, luego de un primer pacto sellado entre los rectores y el ministerio de educación.

Al menos en el papel, se consiguió un presupuesto mayor, de \$4.5 billones, porque a la vista está el primer incumplimiento de lo acordado, porque sólo se autorizaron para ejecutar \$ 75.000 millones de una partida de \$350.000 para mantenimiento de las universidades. Incumplimiento que produjo una serie de movilizaciones escalonadas durante la parte final del año 2019.

En particular, la cota de esta lucha la marcó una novedosa y eficaz interlocución con el gobierno del presidente Iván Duque, una joven figura de la reacción política. El buscó zanjar el conflicto con la financiación de la educación superior en los primeros 100 días; y tuvo que enmendarle la plana al primer acuerdo firmado con los rectores para responder a las exigencias hechas por la dirección estudiantil que no aceptó ese arreglo inicial. De ese modo, los estudiantes colombianos adquirieron estatura política y legitimidad triunfando parcialmente.

Este ciclo de plantones, movilizaciones concurrecidas y bloqueos de instalaciones universitarias marca el paso de la Universidad de la guerra a la reconstrucción de la universidad de la paz, interrumpida, aplazada por más de medio siglo. Al disponerse, los universitarios movilizados tocan la abismal desigualdad, y el

aumento sostenido de la tasa de desempleo, que más golpea a los jóvenes con tasas superiores al 16 %. A la fecha los encuentra *ad portas* de un gran paro nacional convocado para el próximo 21 de noviembre.

Universidad, Paces e Impasses

Colombia pronto cumplirá tres años de haber firmado el gobierno de Juan Manuel Santos, un segundo Acuerdo de paz. Esta vez con la insurgencia subalterna de las Farc-Ep, después de un primer ciclo pacificador que selló la dejación de armas del Movimiento 19 de Abril, M19, la mayoría del Ejército Popular de Liberación, el Epl, el Prt, y el Quintín Lame, un grupo insurgente indígena, alzado en armas en el suroccidente del país.

Este fue un adiós a las armas a cambio de una nueva Constitución, que por una parte, garantizó la defensa individual de los derechos fundamentales de los colombianos en los estrados judiciales; y por la otra, la constitucionalización de la apertura económica neoliberal. Tal fue el resultado perverso de las deliberaciones de las tres mayores fuerzas políticas representadas, la Alianza Democrática/M19, Partido Liberal y el Movimiento de Salvación Nacional, un agrupamiento conservador doctrinario.

Esas fuerzas políticas obtuvieron la mayoría en la elección de delegados a la asamblea constituyente, votada por menos del 30 por ciento de la ciudadanía, en diciembre de 1990. En suma, hablamos en términos ideológico-políticos del bipartidismo tradicional y una tercera fuerza plural, que eligió el segundo mayor número de delegados constituyentes. Entre ellos controlaron las deliberaciones y transaron el resultado final de aquel orden político y social contradictorio en sí.

Así es como se estructuró un sistema político con visos de modernidad que definió a la nación colombiana en términos pluriétnicos y multiculturales. Una nación que por primera vez aceptó la presencia deliberante de las minorías étnicas, afro e indígenas.

Aquella paz pactada, la que dio inicio a los años 90, fue, sin embargo, parcial. Estuvo antecedida por los acuerdos de Sitges y Benidorm, cuyo Frente Nacional cerró la década de la gran Violencia entre masas liberales y conservadoras, enfrascadas por sus dirigencias ausentes en una guerra civil no declarada, después del magnicidio de Jorge E. Gaitán, el 9 de abril de 1948.

El nuevo ciclo de la paz acordada con la insurgencia subalterna entre 1989 y 1990, en lo principal, se tradujo en elaborar y aprobar una nueva Constitución que nunca obtuvo el referendo directo por la ciudadanía; en su lugar lo hizo el congreso con la respectiva sanción presidencial en el año 1991.

Así se dio vida institucional a un régimen Neopresidencial bifronte, con una recuperación de gobernabilidad, mediante un ejecutivo separado de la dirección económica, que ahora quedó en la Junta directiva del Banco de la República. Un rediseño de la autoridad legitimado por los mecanismos de participación democrática que sólo fueron reglamentados a medias, con la prueba de un estatuto de la oposición que entró en vigencia apenas en el año 2018. Lo cual resume bien las vicisitudes experimentadas en este reencauche democrático.

Con las nuevas reglas del juego político, Colombia definió su Estado social de derecho; y autocalificó a su comunidad política como una democracia participativa. El poder constituyente convocado fue impulsado por una emergente tercera fuerza política, abanderada por una exguerrilla. Con él se dejó atrás la aspiración de continuar un gobierno autoritario de ejercicio casi centenario que servía a una clase dirigente oligárquica. El derogado era un orden político-jurídico reaccionario que nació en 1886, después de la derrota del radicalismo liberal, que alcanzó a gobernar el país por menos de 20 años.

El reemplazo fue una hegemonía conservadora que duró 44 años, siendo éste un caso casi excepcional para América Latina. Fracaso histórico que de modo paradójico ofreció materia para la más celebrada creación estética, la novela Cien años de soledad, publicada por Gabriel García Márquez en 1967. En ella, en un cruce genial entre realidad y ficción, se narra el resultado de esta coexistencia entre gobernantes y gobernados, en medio de interminables guerras civiles que extinguen la estirpe de los Buendía.

De la república señorial oligárquica al capitalismo político

El antiguo régimen de 1886, con muchas reformas parciales, y pocos interregnos de normalidad, no pudo prescindir, en lo general, del uso del estado de sitio bajo la centralidad del poder presidencial. La excepcionalidad fue la impronta de gobierno de una nación contrahecha, fracturada, atrasada, dispersa entre tres

cordilleras, frágil en materia de cultura ciudadana, debida en buena medida a los altísimos índices de analfabetismo y miseria rural y urbana.

Este precarísimo estado nación que institucionaliza mediante una asamblea constituyente escogida a dedo, tuvo en lo ideológico cultural una escuela a su medida, para adoctrinar a las masas de catecúmenos, que aprendían a leer, si acaso, con los curas doctrineros y los misioneros que “rescataban” a las minorías de su aislamiento hasta los finales del siglo XIX.

La clave de bóveda de este orden cultural atrasado, con profundos rasgos semif feudales estuvo dirigido, desde su comienzo regenerador, por una oligarquía intelectual, de orígenes religiosos y laicos, en una mezcla de difícil separación, donde conservadurismo católico, y radicalismo liberal cruzaron armas y cánones intelectuales para hacer de la nueva república un frankenstein que quiso, en vano, armonizar a Rousseau con Tomás de Aquino.

Su basamento económico estaba conformada por el entrecruce de intereses de terratenientes, burguesía compradora, y pequeños núcleos de burguesía industrial, repartidos en cuatro enclaves urbanos principales, Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cali. Hacía parte del proceso de acumulación primario exportador que han registrado diversos historiadores de la economía latinoamericana. Y en Colombia, de manera particular, los ensayos de Mario Arrubla acerca del subdesarrollo colombiano.

Esta oligarquía político-económica depositó la orientación de la naciente sociedad civil urbana en la tutela iglesia católica, apostólica y romana, y en las escuelas parroquiales y misiones evangelizadoras la suerte de la población que habitaba los espacios rurales, semi rurales y selváticos.

Para fines del siglo XIX, en Colombia despuntaba en lo económico un capitalismo periférico, que se incubó con sobresaltos a partir de la reforma del medio siglo, que le quebró una vértebra a la feudalidad poscolonial. Colombia continuó, sin embargo, una economía en la que preponderó hasta hace muy poco la mono exportación de productos agrícolas, y materias primas, y paralelo con ellos, la extracción de recursos no renovables.

Se fue produciendo lo que Marx denominó en sus apuntes de los Grundrisse, una subsunción formal del proceso de trabajo por el capital. En el entretanto, los máximos réditos provenían, por etapas, de la minería del oro, la sal, el platino, las

esmeraldas, la sal, y desde la primera mitad del siglo pasado, de la extracción petrolera y de carbón, bajo el oligopolio extranjero.

En todos los casos, la presencia del estado, su captura por las elites, hizo posible el triunfo de este capitalismo dependiente-tardío, del que habla Juan Carlos Portantiero en sus ensayos sociológicos, y que en particular cita en la escritura de su libro *Estudiantes y política en América Latina, 1918-1938. El proceso de la reforma universitaria* (PORTANTIERO, 1978).

Unidad nacional y Regeneración clerical

Bajo estas premisas socio-económicas, el proyecto de unidad nacional de Colombia, fraguado durante la segunda mitad del siglo XIX, en lo político cultural, conocido como la Regeneración, tomó su nombre de la publicación de un contra reformador que era un radical arrepentido, Rafael Núñez.

La regeneración le dio existencia plena a una república señorial, – según tesis propuesta por Antonio García Nossa –, un colombiano, autoridad latinoamericana en materia de reforma agraria; una experticia paradójica en las condiciones de Colombia, que ha hundido todo intento de reforma.

Esta dirección política modernizante, con una resistente coraza clerical antimoderna en lo educativo, extendió el confesionalismo a la educación superior, luego del interregno de la primera república liberal que le dio existencia a la Universidad de la República de los Estados Unidos de Colombia en 1867. Con función de dominio, la universidad regeneradora atendió a los designios del concordato de 1885. Firmado por el cartagenero Rafael Núñez, con el sostén teórico de un conservador fundamentalista, Miguel Antonio Caro, prendado de la monarquía española tout court, cerró la clave de bóveda cultural que aplazó el acceso masivo a la modernidad, y dejó a determinados poetas y artistas en el limbo, o al borde del suicidio. De ellos es emblemático el “suicidio” de José Asunción Silva, la errancia de Porfirio Barba Jacob, y el exilio de José María Vargas Vila.

Los segundos padres de la nación regeneradora, fueron la contra marcha después de la independencia Bolívar y Santander. Desatendieron las indicaciones inteligentes del radicalismo sensato, expresado por Manuel Ancizar, el primer rector de la Universidad Republicana; y los consejos de un conservador ilustrado, Sergio Arboleda, propietario de esclavos él mismo. Autor de uno de los tres proyectos de

constitución anteriores a 1886, quien reclamaba de la fronda ultramontana descentralización y respeto para las minorías; razón de sobra para que fuera excluido por el binomio Núñez/Caro de la segunda asamblea nacional constituyente. Como consuelo le quedó desempeñarse como rector de la Universidad del Cauca hasta el final de su vida.

Esta suerte de monarquía constitucional fue la república de la postindependencia que se entroniza en el territorio de Colombia después de la disolución de la llamada Gran Colombia. Es el orden constitucional de 1886 que se mantendrá hasta 1991. En materia de universidades, el *ancien régime* tropical reconoció, sin embargo, dos instituciones de corte civilista: una, fruto de la primera república liberal, que cambió le cambió el nombre a la primigenia Universidad Central creada por los generales Bolívar y Santander, por Universidad de la República de los Estados Unidos de Colombia, establecida por otro general, Santos Acosta en el año 1867.

El otro foco de laicidad era la Universidad del Cauca, con sede en la ciudad de Popayán. Era la capital del soberano estado del Cauca que controlaba todo el suroccidente de Colombia. Junto con estas universidades se restauraron las universidades confesionales clausuradas por el radicalismo durante la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera.

Con la Regeneración se volvieron a abrir sus puertas el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (1653), el Colegio de San Bartolomé (1623), base de la Universidad Javeriana, y la Universidad de Santo Tomás (1580). Todas estaban ubicadas en Bogotá, la capital de la república, instaurada con la guerra de independencia, después del triunfo de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Porque el otro centro de la civilidad, Cartagena había sido aplastado y sometido por la tropa de Pablo Morillo, en el tiempo de la reconquista, desatado contra la excolonia de la Nueva Granada, después del derrumbe de la primera república española.

Radicalismo, reforma educativa y universidad Republicana

El nuevo orden político y la restauración católica en materia de enseñanza básica y secundaria, y parcial en la educación superior, se impuso luego de vencer

los ejércitos regeneradores en los campos de batalla al reformismo liberal, que fracasó en su intento de establecer un gobierno federal encabezado por civiles transformados en caudillos militares, con nexos con la masonería.

En materia educativa el reformismo liberal tuvo como adalid principal al educador santandereano Dámaso Zapata, animador de la reforma educativa la Ley 2a. de 1870, con la que se dio existencia a las escuelas normales bajo los auspicios intelectuales de la misión alemana de 9 educadores que buscó reemplazar la influencia avasallante de la iglesia católica en la educación de la población nacional, a través de la pedagogía pestalozziana. Con el triunfo de la Regeneración esa obra quedó truncada hasta los inicios de la segunda república liberal en el siglo XX.

Después del triunfo del 7 de agosto de 1819, las elites criollas, blancas y mestizas en su absoluta mayoría querían ser agentes de las reformas en lo económico y político, estaban dispuestas a la modernización, mientras que en materia cultural y educativa estaban divididas entre el positivismo y el neotomismo. Con la Constitución de Rionegro (1863), sin embargo, quisieron establecer una efectiva separación entre Iglesia y Estado. Y permitir así la emergencia del laicismo, la instauración definitiva del pensamiento positivista de raigambre inglesa, las escuelas de artes y oficios, base de la enseñanza de la ingeniería. Combinado todo con el programa político francés cocinado entre la república y la restauración.

Esta primera república federal de cuño liberal, luego del centralismo presidencialista bolivariano se hundió en el curso de los años 80. La iglesia católica que había sido expulsada del gobierno y administración de escuelas, colegios y universidades durante la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera. El viejo orden poscolonial tuvo una restauración relativa con el triunfo presidencial de Rafael Núñez, quien firmó el Concordato con el Vaticano en 1885. Las luces perseguidas desde los fines del siglo XVIII quedan sometidas al oscurantismo para las masas, y las profesiones tradicionales para los raquíuticos sectores medios y la dirigencia criolla.

De ese modo, la educación pública volvió a ser controlada y dirigida por la Iglesia católica, aunque resistida por los proyectos de Universidad Republicana con la creación de Nicolás Pinzón Warlosten del Externado de Derecho en 1886, amparado en el positivismo de Herbert Spencer, que era un autor de culto del regenerador Rafael Núñez, quien se había retirado a su residencia de Cartagena.

El radical Pinzón Warlostén, y otros patricios liberales querían acompañar la incipiente sociedad civil, las actividades del moderno comercio y la banca, así como la formación de la burocracia y la ciudadanía. Que había pasado primero con voto censitario, y luego con una paulatina expansión del voto masculino aspiraba a la universalidad, y a la conformación de una sociedad política contrahecha por los dictados de la oligarquía de terratenientes, comerciantes y prestamistas, a la que se sumaba la burocracia militar y eclesiástica.

Tránsito al capitalismo político tardío

Las formas socio políticas de finales del siglo XIX, imponen una ruta de desarrollo capitalista político dependiente a Colombia. A éstas las ha llamado Marcelo Cavarozzi (1996) forma de capitalismo político tardío que reemplazaron a los órdenes oligárquicos en América Latina, y que luego entran en crisis en la década de los años 60 del siglo pasado.

En Colombia, que no fue uno de los cuatro países avanzados en la práctica del modelo de Industrialización por sustitución de importaciones, ISI, como si lo fueron Argentina, Brasil, México y Chile, según Cavarozzi, se adelantó, en cambio una modernización a lo Junker, sin reforma agraria, con el tratamiento de los pueblos originarios como menores de edad, las mujeres como dependientes del patriarcado, y la juventud sometida a la tutela religiosa y a la urbanidad de Carreño.

Durante el primer medio siglo veinte, la población autóctona vegetó, fue sometida a la esclavitud o la servidumbre en las haciendas; y cuando no es fue explotada bajo formas de aparcería, terrazguería, o peonaje en los monocultivos más rentables, y la extracción minera; y con los desplazamientos y desarraigo de las masas rurales, aparecen los trabajadores asalariados, esclavos libertos, indígenas errantes, mestizos empleados en las obras civiles y portuarias. Todos presa de una altísima cuota de analfabetismo, quienes poblaron las barriadas miseria de las principales ciudades poscoloniales, o quedaron enfeudados, y aculturados en grandes enclaves agro-exportadores en el interior cercano a las zonas costeras en ambos océanos.

Este capitalismo periférico es expresión de una hegemonía cultural en cabeza de grandes intelectuales tradicionales, el dúo de un liberal y un conservador

regeneradores, sociólogo por afición hoy, y gramático aventajado el otro, Núñez y Caro, que no tienen el mayor interés en la democracia liberal. Así las cosas, la universidad republicana, llamada en sus inicios Universidad Central con centros en tres capitales de la así llamada república de Colombia, Bogotá, Quito y Caracas.

Creada en los albores de la independencia, esta universidad languidece con la muerte del general Francisco de Paula Santander, su inspirador, prendado de la pedagogía Lancasteriana. Es sitiada por las universidades confesionales, regentadas por jesuitas y dominicos, sujetos a los cánones de la contrareforma importada de España y el Vaticano.

Esta república “regenerada” después del hiato radical, sufre las orientaciones deformantes, en parte, que resultan de la injerencia imperialista neocolonial del gobierno de los Estados Unidos, que presidía Teodoro Roosevelt, quien impone los designios de la doctrina Monroe, luego que el proyecto Bolivariano hizo agua en las deliberaciones del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), condujo a la dictadura bolivariana, el atentado fracasado contra él, y su retiro definitivo de las funciones de gobierno hasta su muerte.

La creciente presencia estadounidense sigue la suerte del estado soberano de Panamá, cuyo istmo es la presa codiciada para la construcción del Canal que conecta por fin los dos océanos, y hace posible el transporte del oro que se extrae de las minas de California y luego de parte de Alaska. Pero, antes se tiene que producir el fracaso francés en materia de presupuesto e ingeniería en el emprendimiento inicial de aquella monumental obra que arrancó en la segunda mitad del siglo XIX.

El nuevo socio imperialista, resistencias y crisis de la universidad

“En un cuadro dominado por la presencia de oligarquías cerriles y la ausencia de grandes organizaciones populares, varias décadas de la política y la cultura latinoamericanas no podrían ser explicadas sin esa enorme “reforma intelectual y moral” que el movimiento universitario del 18 descargó sobre el continente.”
(PORTANTIERO, 1978, p. 28).

El nuevo acuerdo económico y político con el hegemón internacional en ascenso, los Estados Unidos, estuvo afectado por variadas resistencias, de los

grupos subalternos, obreros de puertos y obras civiles; de los petroleros dirigidos por las formaciones políticas socialistas y anarquistas, primero, y luego por el naciente partido comunista sujeto al stalinismo en 1930.

Múltiples escollos hubo para el despeje capitalista de Colombia. En parte se logró por el pago compensatorio que recibiera de EUA por el robo de Panamá, por una cascada de empréstitos, así como por bonanzas circunstanciales del café. Esta nueva hegemonía internacional vino a consolidarse durante la hegemonía conservadora que termina en 1930.

Esta hegemonía impidió el desarrollo cabal de la modernidad como modernización y modernismo juntos. Truncó, cuando no marchitó la modesta reforma liberal nacional en el sistema de educación pública, que sí la hubo, y tuvo incidencia considerable y presencia efectiva en varias repúblicas suramericanas vecinas.

El recorrido de larga duración, y acumulación originaria de capital, producto de la exacción de la fuerza de trabajo indígena, obrera y campesina, con inversión extranjera preferente en los enclaves petroleros, y menor en alimentos y transportes, sufrirá los embates de la recesión del 29, que harán posible el inicio de una serie de gobiernos liberales. Colombia experimentará un despegue con la integración de un modesto mercado interno que conectará la región central andina con Barranquilla y Cartagena, puertos sobre el Caribe, puntos de entrada y encuentro con las nuevas escuelas literarias, filosóficas, políticas y musicales.

Esta integración irá erosionando las relaciones semif feudales de la explotación cafetera y bananera. La propiedad privada de terratenientes y enclaves imperialistas será objeto un periodo de gran agitación social y sindical, que cerrará el legendario episodio de la masacre de las Bananeras; y el establecimiento de una legislación laboral que fortalecerá el reconocimiento de la primera central obrera de influencia socialista y comunista, con la “revolución en marcha”. Los grupos y clases subalternas que acompañaron la modernización colombiana experimentarán el fracaso de sus promesas reformistas: el remedo de reforma agraria, con la ley de tierra de la administración López que prometía a los trabajadores del campo propiedad; combinada con la autonomía universitaria para los sectores medios, al calor del grito de la Universidad de Córdoba de 1918.

Uno y otro son hechos significativos que remiten en lo histórico a un doloroso periplo de más de medio siglo en procura de una modernidad recortada. Llevarán al traste la hegemonía de la elite liberal que sustituyó el dominio conservador y reaccionario de 46 años. Mientras que la segunda república liberal se ufanaba de consagrar la función social de la propiedad privada, dizque quebrándole así una vértebra al viejo orden semi feudal, los campesinos hacían huelgas y se organizaban en ligas agrarias para evitar la expulsión y el asesinato a manos de los testaferros de los terratenientes absentistas.

A partir de 1930, el triunfo del liberalismo, con apoyo estadounidense al primer presidente, Enrique Olaya Herrera, repercutió en el microcosmos de la universidad pública, y el sistema educativo luego. Porque en los primeros años se integra la universidad y se le da asiento en una ciudadela en la que tendrá asiento la Universidad Nacional de Colombia hasta hoy en día. Es la perla que corona lo progresivo de la república liberal, y en ella se sientan las bases para un acceso tardío al pensamiento moderno, en particular, durante la rectoría de Gerardo Molina, que será interrumpida por la insurrección popular del 9 de abril, que se tradujo en una militarización de la universidad, y el nombramiento de los primeros rectores militares.

Entre los años 30 y 40 se produjo ajuste de cuentas intelectual, lento con las tradiciones premodernas, que tiene como animadora a la generación de Los Nuevos, aliados con ciertos intelectuales centenaristas. Fueron el portaestandarte una reforma educativa que alcanza a la educación pública elemental y media, y sobre todo le da existencia a la Universidad Nacional de Colombia. El presidente Alfonso López Pumarejo atendió a los dictados del ideólogo liberal, Germán Arciniegas, cuyo pensamiento se había moldeado en las canteras de la autonomía que se expandieron por toda América desde la Universidad de Córdoba.

Arciniegas, desde la revista *Universidad* libro una suerte de kulturkampf contra el establecimiento conservador católico, que hegemonizaban Miguel Antonio Caro y los presidentes gramáticos como lo ha estudiado el historiador Malcom Deas en sus ensayos *Del Poder y la Gramática*. entre otras temáticas fijó su atención en los estudiantes y el gobierno universitario, y con ello ganó un concurso convocado en 1922, en el marco de la celebración de un congreso universitario internacional. Allí partía de citar al educador español Eugenio D'Ors, para indicar que la

participación no era lo primordial, sino la “autoridad”. Con estas premisas, Arciniegas concluye que era necesaria “una organización autóctona, que sería la formación de los consejos estudiantiles en cada facultad, con personal elegido por la totalidad de los escolares y anualmente renovado” (PORTANTIERO, 1978, p. 330).

Arciniegas mismo cierra la reflexión, – siendo ya un docente en Colombia –, así:

Hay que penetrar, y hacer dentro de cada estudiante, el proceso y la filosofía de la universidad, y llevarlo de la contemplación a la acción, y hacerlo autor y darle autoridad y colocarlo en el *demos* frente a la democracia, esto es, hacer del estudiante el estudiante. (PORTANTIERO, 1978, p.339).

Para conocer lo alcances de aquel movimiento, una cita tomada del Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba, FUC que dice:

la FUC reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el *demos* universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes...La autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando. (PORTANTIERO, 1978, p. 44).

A lo anterior se unía la invocación, la interpelación explícita, directa a “los hombres libres de Sudamérica”, al mismo tiempo que señalaba el dominio clerical: “No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa”.

De ese modo se asistía al advenimiento de una universidad nueva, en la que confluyeron el americanismo y el solidarismo, dice Portantiero. Y de Córdoba se extiende en 1921, a través del Congreso Internacional de Estudiantes, reunido en México. Pero pronto tendrá que vivir la prueba de su permanencia, empezando por Argentina. Allí gozó de la protección y simpatía del radical Yrigoyen, pero quien lo sucede, Alvear es animador de la tendencia de derecha del mismo partido, echa atrás los logros de la reforma.

Sin embargo, vía plebiscito, Hipólito, Yrigoyen regresa al gobierno en 1928, y la reforma de Córdoba vive su canto de sirena, porque en 1930, se produjo el golpe militar de Uriburu, quien a los tres meses interviene con sables y gases las universidades argentinas y los estudiantes viven el horror de la represión permanente (PORTANTIERO, 1978, p. 57).

De la reforma universitaria a la primera revolución latinoamericana

Con todo lo dicho, la reforma caminó a otros países, en una primera oleada alcanzó al Perú de Haya de la Torre y el Apra, Chile, Cuba, Colombia, Guatemala y Uruguay. En Colombia tuvo que enfrentarse con la hegemonía conservadora, y, sin embargo, animó la creación de la *Federación de Estudiantes* bajo la dirección de Germán Arciniegas, estudiante de derecho de la Universidad Nacional, con el apoyo del poeta y escritor mexicano Carlos Pellicer que tenía la experiencia del Ateneo de la Juventud Mexicana.

Él dirigió también la revista *Universidad* que se hace vocera de esta reforma, y en la que se forjan las plumas que fundarán la revista *Los Nuevos* (1925). Ésta le da impulso a la modernidad artística y literaria en la provincial Bogotá. Su actividad publicística, periodística y organizativa hallará concreción en la Ley de Reforma Universitaria de 1933/34, durante la primera administración de López Pumarejo. Esta ley reconoció el derecho de los estudiantes a elegir rector de la Universidad Nacional, a tener un representante en la Cámara, cargo que él tendrá oportunidad de desempeñar. Arciniegas testimoniará entre fantasía y realidad en un libro, *El estudiante de la mesa redonda*, la historia de ese periodo en boca de los estudiantes que conversan con desparpajo y gracejo sobre el tiempo de las reformas.

En ese mismo periodo, previo a la renovación universitaria colombiana, hay un hecho luctuoso que marca también la crisis de la hegemonía conservadora, en su relación conflictiva con las juventudes, la represión a los estudiantes, y la muerte del primer mártir universitario, Gonzalo Bravo Pérez; un estudiante de la escuela de derecho de la Universidad Nacional.

Gonzalo muere atravesado por una bala al final de las jornadas de junio de 1929, a las 10 de la noche, cuando una patrulla policial disparaba contra un comité de universitarios, durante el toque de queda en las inmediaciones del palacio presidencial. Después de las manifestaciones en contra del gobierno de Miguel Abadía Méndez, quien nombró al general Carlos Cortés Vargas director general de la policía nacional, después que éste reprimió y mató los obreros en huelga contra la United Fruit, en Ciénaga, Magdalena, en 1928.

Una buena caracterización de la universidad latinoamericana de los años 30, se puede tomar de lo escrito por un dirigente estudiantil argentino, Mariano Hurtado de Mendoza, dirigente de Insurrexit, quien escribía un artículo sobre la reforma cordobesa en 1925, quien establecía:

La población de nuestras universidades está formada exclusivamente por individuos de la clase media; sus medios económicos, únicos habilitantes para entrar y permanecer en la universidad, van poco a poco desapareciendo en virtud del fenómeno antes citado y se borra así la perspectiva del título salvador que abrirá las puertas del paraíso burgués. El estudiantado debe recibirse o de lo contrario caerá en el abismo sin fondo del proletariado (PORTANTIERO, 1978, p. 105).

Y otro más, el peruano, Raúl Haya de la Torre, quien debatía con la plana intelectual de Insurrexit, en particular con otro articulista, Paulino González Alberdi: “La reforma universitaria nace en la Argentina pero tiene un carácter legítimamente americano” (PORTANTIERO, 1978, p. 106).

A lo que se suma, lo dicho por “Luis”, Umberto Droz el delegado de la Internacional a la reunión de partidos comunistas latinoamericanos de 1929, en Buenos Aires:

Trátase –las movilizaciones de la clase media- de estudiantes y jóvenes intelectuales que no han ligado todavía sus intereses a la explotación colonial de los países latinoamericanos. Porque el proletariado es joven, desorganizado y no tiene todavía una ideología...la pequeña burguesía desempeña un papel político e ideológico desproporcionado con su importancia económica y social. (PORTANTIERO, 1978, p. 109).

Después, ya para el año 1935, la posición negativa del comunismo internacional, hay un escrito de Jorge Dimitrov que reprodujo la revista Insurrexit: “En la época imperialista sólo han podido observarse tendencias revolucionarias importantes entre los estudiantes de los países coloniales y semicoloniales y en las naciones oprimidas” (PORTANTIERO, 1978, p. 112).

Estamos en la antesala de las luchas contra el fascismo y el nazismo en Europa, que luego conducirán al estallido de la II Guerra, con la anexión de Polonia por Alemania, y el pacto de no agresión con la URSS de Stalin. Quien lo registra es un dirigente comunista argentino, Héctor P. Agosti, quien luego propiciará la recepción de los escritos de Gramsci en la Argentina, y desde allí, su difusión en América Latina.

Agosti escribe “Veinte años de reforma universitaria”, cuando se da la lucha entre fascismo y democracia. Dice para entonces:

Veinte años de reforma universitaria prueban su permanente vitalidad, la imposibilidad de considerarla como un hecho terminado, con una fisonomía, un cuerpo teórico y un repertorio de soluciones para los diferentes problemas que la vida plantea de continuo. (PORTANTIERO, 1978, p. 113).

En las condiciones de Colombia y América Latina, el movimiento estudiantil universitario en su hacerse se constituye, como lo anota Portantiero, y lo ilustra el propio Raúl Haya de la Torre, en un pasaje accidentado en la búsqueda de la autonomía política por parte de la pequeña burguesía, ensayándose en el liderazgo de la lucha nacional y democrática, en lugar del proletariado y sus partidos en el trámite de la revolución democrática como tránsito de las sociedades oligárquicas y neocoloniales.

En esa búsqueda, en esa exploración de lo nacional popular, los fenómenos populistas tienen ocurrencia con diferente fortuna, en su cruce con la lucha antiimperialistas y la específica composición de clase en cada país. A partir de la segunda mitad de los años 30, el internacionalismo comunista propone la táctica de los frentes populares, y los partidos de clase se encuentran con lo que han aportado los universitarios y su movimiento cuya génesis reconocida está en el grito de Córdoba de 1918.

En ese periodo se ensaya la experiencia de las revoluciones populares más allá de los CLAUSTROS, y las hubo en el Perú con la prédica anarquista de González Prada, en México con Lombardo Toledano, y en Cuba, por iniciativa de José Antonio Mella, las universidades populares José Martí, para quien, “Las masas populares ven hoy, con bastante justicia, a los cuerpos docentes como unos órganos más de explotación. Debe justificarse con hechos que la universidad es un órgano social de utilidad colectiva y no una fábrica donde vamos a busca la riqueza privada con el título” (PORTANTIERO, 1978, p. 118).

Pero, será, precisamente en Cuba, donde los universitario creen el Directorio Estudiantil Universitario que va a ser parte de la propia revolución; primero de la huelga general que derrocó a Machado en agosto de 1933. Hasta el punto que colocan como presidente al médico Ramón Grau San Martín, quien al poco tiempo renunció y fue reemplazado por el sargento Fulgencio Batista que a todas éstas se había convertido en general. Pero lo que permaneció en Cuba, fue “la fusión entre clases medias y sectores populares...el peso de la juventud como elemento dinamizador, detonante, de la actividad política del resto de la sociedad” (PORTANTIERO, 1978, p. 120).

De esas canteras, y del partido del Pueblo (Ortodoxo), se proyectó un joven abogado, Fidel Castro Rus, quien aparece en Bogotá, como delegado al Congreso

antiimperialista y anticolonial que se instaló en el teatro Colón, y allí dejan caer octavillas entre la concurrencia. Es abril de 1948, y el líder político más descollante es otro abogado, el penalista Jorge E. Gaitán, con quien iba a reunirse la delegación cubana el día que este asesinato, el 9 de abril, cuando bajaba las escaleras de su oficina.

Al regreso Fidel lideró el movimiento 26 de julio, y extremó el legado del periodista Eduardo Chibás, animador hasta su suicidio de una izquierda nacionalista. De ella Castro se reclama su heredero y continuador en la lucha contra la dictadura de Batista, hasta obtener el triunfo liderando “un movimiento nacional popular...con el apoyo de las masas populares urbanas y rurales e incluso de sectores de la burguesía acomodada, pese a las formas ‘plebeyas’, jacobinas, elegidas para la lucha” (PORTANTIERO, 1978, p. 122).

Esto es, la guerra de guerrillas que une a las masas campesinas con los sectores intelectuales urbanos, universitarios y profesionales que liquidan el latifundio y desafían al imperialismo estadounidense; y organizan el asalto al palacio presidencial, el 13 de marzo de 1957. Operación en la que muere José Antonio Echeverría, presidente de la Federación de Estudiantes Cubanos. Estos episodios se cerrarán con el triunfo de la revolución, y la entrada a La Habana el 1o. de enero de 1959, y la huida del dictador.

De ese modo, la lucha universitaria por la autonomía y la democracia adquiere realidad en un país, Cuba, donde concluye Portantiero, “la reforma para ser tal, tuvo que ser, primero, revolución” (PORTANTIERO, 1978, p.128) Se marcaba en el reloj histórico la hora americana que ha seguido sonando de manera interrumpida desde 1959 hasta el año 2019. Este es precisamente el caso de Colombia que después de 60 años, lucha por darle paso, por fin, a la Universidad de la Paz, después de 53 años de guerra social ininterrumpida, con raíces principales en el campo atrasado, donde reinan la desigualdad, el desplazamiento y la excepcionalidad como prenda de garantía de la explotación de hombres y naturaleza.

La otra universidad y la nueva intelectualidad

“El punto central de la cuestión es la distinción entre los intelectuales como categoría orgánica de cada grupo social fundamental y los intelectuales como categoría tradicional; distinción de la que surge toda una serie de problemas y posibles investigaciones históricas”

(GRAMSCI, 2018, p.21).

En forma sintética, para concluir este discurrir ensayístico sobre la experiencia universitaria colombiana, en términos de su participación política, marcada por el tránsito de la universidad heredera de la colonia y la escolástica de la contrarreforma; sujeta la intelectualidad y la juventud a los dictados y guía de la intelectualidad tradicional, a la rebeldía estudiantil, donde se dan los primeros brotes de una intelectualidad orgánica que alumbró los albores de la universidad moderna, del que es un hito fundante el grito de reforma de 1918, en la Universidad de Córdoba.

Pasamos a la gran crisis capitalista de 1929, la lucha antiimperialista, antifascista y antinazi; luego los ecos de la lejana II Guerra Mundial, desde cuyos campos de batalla rural y urbana se proyectan las experiencias de los Frentes populares, que tienen a España y Francia como importantes focos de influencia. Todos estos hechos y situaciones animan una radicalización de la pequeña burguesía, productora y reservorio de intelectuales que en los capitalismo periféricos se radicalizan, se juntan con las causas nacionales y populares, las lideran dándole nacimiento a una intelectualidad revolucionaria.

Será Cuba el teatro de una experiencia socialista, la isla que emprende una guerra de guerrillas rural y urbana, teniendo a los universitarios en los puestos de comando; y con los jóvenes Fidel Castro, Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos, Aydee Santamaría, José Antonio Echeverría y tantos otros hacen la revolución y desarrollan una gran campaña de alfabetización y abren las universidades a los sectores populares del campo y la ciudad.

Colombia a su manera experimenta la experiencia de la reforma universitaria de 1918, y con la segunda república liberal le da curso a la modernidad en los saberes, sociales, las artes y letras, y las ciencias naturales en la ciudad universitaria que van ampliando los cupos, y dándole cabida a los universitarios provenientes de regiones. Hasta que sobrevino la crisis universitaria de los años 60, cuando se establecen una lucha contra la injerencia estadounidense, a través del plan Atcon y

la financiación extranjera para universidades departamentalizadas en enclaves de desarrollo regional.

La universidad pública se politiza, y la izquierda en sus varias manifestaciones reclama de nuevo el gobierno universitario, que había sido aprobado en la Ley de 1933. Avanzada que después fue sepultada en el tiempo de la gran Violencia que se prolongó con la guerra de resistencia campesina, y luego con la insurgencia subalterna.

Se da la breve experiencia del cogobierno en la Universidad Nacional que se rompe con el cierre y desocupación de la ciudad universitaria en el año 1971. Luego sigue el proceso de la universidad transversalizada por la guerra y el estado de excepción que acompañará toda esta trayectoria de guerra y academia hasta la nueva Constitución de 1991, que limita y reglamenta los estados de excepción, y busca legitimar el nuevo orden que promete un Estado social de Derecho.

Ahora, con los acuerdos de paz firmados con las Farc-Ep, se propone alcanzar la Universidad de y para la Paz. Para aclimatarlo requiere Colombia acceder primero, a la igualdad social, puesto que es uno de los países más desiguales del planeta. Esta operación de reforma social, intelectual y moral implica podar la tupida selva de privilegios que crecieron y se robustecieron desde el periodo colonial.

Estas exclusiones y discriminaciones se fueron extendiendo y reforzando a lo largo de los últimos 200 años, 1819-2019. Lo que hace que el Bicentenario levante un renovado Memorial de agravios, donde las movilizaciones universitarias de 2018, y el ciclo que comenzó en el segundo semestre del año 2019, marcan la pauta, y actualizan la urgencia de renovación del sistema universitario estatal a todos los niveles, con todas las condiciones que reclama, empezando por establecer el libre acceso a la educación universitaria.

La construcción sostenida de la igualdad social y el libre acceso a la educación básica, media y universitaria hacen posible que los lazos de dependencia y subordinación personal sean, en efecto, abolidos y/o extinguidos, y que la reforma intelectual y moral propia de la modernidad tantas veces aplazada sea el vehículo, el medio que la propicia, exigiendo de antemano una efectiva libertad de expresión y pensamiento, y de auto-organización de los grupos y clases subalternas, sin más exclusiones, asesinatos, y discriminaciones.

En suma, el advenimiento de la Universidad de la Paz sólo es posible con una efectiva transformación del sentido común dominante, que consagró hasta hace poco a la guerra como instrumento adecuado para recuperar la convivencia y el disfrute de la vida de la comunidad nacional colombiana, blandiendo el imaginario de la “seguridad democrática” contra las manifestaciones de rebeldía, desobediencia y resistencia, manifiestas en los espacios de la sociedad política y la sociedad civil al alcance de los subalternos en este tiempo de crisis de hegemonía, que avance zigzagueante en procura de un desenlace adecuado y feliz.

Existe a lo largo de estas luchas se ha consolidado un compromiso con la nación colombiana, en el sentido que tiene que acceder ésta y su universidad, en su carácter de intelectual orgánico de masas, de una vez por todas, a la mayoría de edad intelectual y política. Por lo que la población, sin exclusiones, tiene que beneficiarse de su intelectualidad en función pedagógico política; la que se forma en todos los espacios escolares que se coronan en los posgrados de los saberes sociales y naturales.

Se trata, en esta universidad de la transición, de darle organicidad a la nueva intelectualidad capaz de conectar a los subalternos plurales, con inteligencia y creación lo global y local, cooperando en la conducción y orientación en las instancias municipales, departamentales, y regionales, de los procesos de reformas radicales a todos los niveles que se buscan impulsar a través de la concertación de una constituyente social y educativa.

De esa manera se conjura la crisis de representación que se abre en la década de los años 80 del siglo pasado. Frustrada aquella negociación de paz, y producido el genocidio de la Unión Patriótica, con una dirección universitaria y popular sacrificada, se encara en toda su complejidad la lucha por una nueva hegemonía cultural, que gana un nuevo nivel, con la constitución de 1991, después del sacrificio de tres presidenciables de diverso signo ideológico, Luis Carlos Galán, del Nuevo Liberalismo, Carlos Pizarro LeónGómez, Alianza Democrática/M19 y Bernardo Jaramillo, Unión Patriótica.

Este sacrificio no detuvo el proceso de revolución democrática, que se corresponde con la elaboración de nuevos grupos intelectuales orgánicos a proyectos de reforma democrática y en procura de la justicia social. De otra parte, al cierre de este ensayo, no se puede olvidar tampoco, como lo establecía Antonio

Gramsci, que “la relación entre los intelectuales y el mundo de la producción no es inmediata, como ocurre con los grupos sociales fundamentales, sino que es “mediata” en grado diverso en todo el tejido social y en el complejo de las superestructuras, en los que los intelectuales son los “funcionarios” (GRAMSCI, 2018, p. 17-18).

Todo cual supone, un aprendizaje continental, aprehendido al calor de los proyectos progresistas y sus gobiernos de los últimos veinte años en América Latina, ninguno de los cuales logró triunfar todavía en Colombia. De ahí, que esta dirección intelectual orgánica, proponga cada vez más, la recuperación de lo aprendido por la intelectualidad americana en Córdoba, y en la revolución cubana, medio siglo después.

Para proponer teniendo a las universidades como liderazgo académico y moral el impulso a una constituyente social que tiene a la constituyente educativa como su propulsor necesario; portadora de una reforma intelectual y moral radical como su ariete principal, de una revolución democrática interrumpida por sucesivos actos de guerra, cooptaciones, transformismos y eliminación de liderazgos individuales y colectivos de los subalternos.

Esta intelectualidad orgánica, clasista y plural a la vez, forjada en las universidades, y en los espacios de la sociedad civil y política renovada, posibilitará el triunfo suspendido hace un siglo, de una dirección política, económica-social e ideológica progresiva, ininterrumpida, construida y animada desde abajo, sin más exclusiones o autocensuras.

Referências

ARBOLEDA, Sergio. **La República en la América Española**. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1972.

CAVAROZZI, Marcelo. **El capitalismo político tardío y su crisis en América Latina**. Serie estudios sociales. University of Texas: Homo Sapiens ediciones, 1996.

DEAS, Malcom. **Del Poder y la Gramática**. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1982.

GRAMSCI, Antonio. **Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura**. Roma: Editori Riuniti; Istituto Gramsci, 1996.

GRAMSCI, Antonio. **Los intelectuales y la organización de la cultura**. Buenos Aires: Edicol, 2018.

HERRERA ZGAIB, Miguel Angel et al. **Educación Pública Superior**: hegemonía cultural y crisis de representación política en Colombia, 1842-1984. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2009.

MEDINA G., Carlos. **Crónicas de Violencia**. Bogotá: Comité de solidaridad con presos políticos, 1983.

PORTANTIERO, Juan Carlos. **Estudiantes y política en América Latina**. 1a. edición. México: Siglo XXI Editores, 1978.